



INDICACIONES

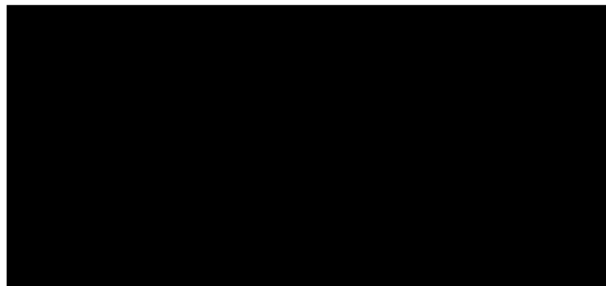
El H.S. Iván Moreira Barros viene en presentar indicaciones al proyecto del ley que modifica la ley de control de armas N° 17.798, Boletín N° 5254-02, en el siguiente tenor:

En el artículo 7° inciso 6°, modificarlo en el siguiente sentido:

1) Art 7° Inc. 6° “La Dirección General de Movilización Nacional podrá, por resolución fundada, autorizar a deportistas calificados a poseer un número mayor de armas al señalado en el inciso anterior, por razones de exigencia profesional debidamente certificada, no pudiendo en ningún caso superar un límite total de tres armas por disciplina deportiva en que haya demostrado la calificación ya señalada.”

2) Crear un artículo 7° transitorio del siguiente tenor:

Artículo Séptimo.- Los deportistas, cazadores y coleccionistas que, al momento de la publicación de la presente ley tuvieran o poseyeran, de forma legal, un número de armas superior al señalado en el artículo 7° de la ley N° 17.798, podrán conservarlas, pero no estarán habilitados para solicitar más inscripciones si con ello excedieren el nuevo límite establecido en el artículo antes referido.



IVÁN MOREIRA BARROS

SENADOR

VOTACIONES SEPARADAS MODIFICACION A LEY ZAMUDIO

BOLETIN 12748-17

ART 1 INCISO primero (Aprobar)

Norma: “Instaurar un procedimiento judicial especial y rápido que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho”

ART 1 INCISO 2 (Rechazar) **Norma de quorum 4/7**

Norma: “Corresponderá a todos los órganos y autoridades de la Administración del Estado, sus servicios públicos, empresas relacionadas que ejercen funciones públicas, así como al Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

JUSTIFICACION: La norma es redundante, la obligación de garantizar a toda persona, sin discriminación el ejercicio de sus derechos ya se encuentra consagrado en la Constitución Política de la República y diversas leyes de la República. Por lo demás, que se distinga al Poder Judicial, al Ministerio Público, y las Fuerzas Armadas, carece de fundamentación suficiente y queda la impresión que esas instituciones merecen un tratamiento específico, sin que quede claro cual fue el criterio para que sean esos órganos y no otros los mencionados cuando todos son parte de la administración del Estado.

ART 2 CONJUNCION Y (Rechazar)

Norma: “Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión, preferencia o restricción carente de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares o que tenga por objetivo o resultado la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República”

JUSTIFICACIÓN: La actual normativa parece razonable al requerir el cumplimiento de dos requisitos copulativos para que ocurra la discriminación arbitraria. La nueva conjunción “o” transforma a una causal con doble requisito en dos causales independientes lo que trae consecuencias, por cuanto se estima que no puede dividirse la actual definición de discriminación arbitraria en dos hipótesis autónomas y equivalentes, pues para que una acción u omisión discriminatoria esté completa, debe tener como consecuencia la privación, perturbación o amenaza del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales.

De aprobarse la norma en su actual redacción no habría obligación de resultado, y por lo tanto, toda exclusión o distinción aunque no amenace o prive el ejercicio de derechos fundamentales puede constituir “Discriminación arbitraria”, lo que a todas luces es una exageración.

ART 2 Agrega : el trabajo, profesión u oficio (Aprobar)

Norma: “Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión, preferencia o restricción carente de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares o que tenga por objetivo o resultado la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Dichas distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones merecerán particular reproche cuando se funden en motivos tales como el racismo, la pertenencia étnica, la identidad cultural, la nacionalidad, la situación migratoria o condición de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la participación o afiliación o no a organizaciones gremiales o sindicales, el sexo, la orientación sexual o afectiva, el género, la identidad o expresión de género, las características sexuales, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la condición de salud mental o física, la discapacidad, la seropositividad, el trabajo, profesión u oficio, o cualquier otra condición física y/o social.”

Hasta aquí comienza la votación 22/07

ART 3 TER (Rechazar) Norma de Quorum 4/7

NORMA: “Tribunal competente. Será competente para conocer de la acción de no discriminación arbitraria el juez de letras correspondiente al domicilio del demandado o del demandante, a elección de este último.”.

JUSTIFICACION: Se alteran las normas de competencia normales. En materia civil es tribunal competente el del domicilio del demandado. No se ve motivo plausible para alterar esas reglas y establecer un criterio laboral donde no hay igualdad de las partes, sino que prima el principio de Indubio pro operario. La comisión pasó de un procedimiento que buscaba emular a un recurso de Protección a otro que imita a la acción de tutela laboral, ignorando en ambos casos que estamos frente a un procedimiento civil.

ART 4 LEGIMITACIÓN y FACULTAD DE SOLICITAR INDEMNIZACION DIFUSO (RECHAZAR)

NORMA: “Si la discriminación tiene carácter generalizado o afecta a sujetos múltiples, comprometiendo el interés colectivo o difuso de uno o más grupos o colectivos discriminados, la acción también podrá ser presentada por personas jurídicas sin fines de lucro dedicadas a la

promoción, protección y defensa de los derechos afectados, constituidas con anterioridad a la ocurrencia de los actos u omisiones discriminatorios que se denuncian”

JUSTIFICACION: En los casos discriminación difusa la interposición de la acción por cualquier persona o por interés colectivo o difuso, no puede extenderse al ejercicio de la acción indemnizatoria. La razón es velar que la víctima directa de la discriminación efectivamente reciba el pago de la indemnización cuando ésta corresponda y ante la interposición de la acción indemnizatoria por intereses colectivos o difusos, ello no podrá asegurarse.

Es fácil suponer que antes esta prerrogativa se pueda generar un incentivo perverso para denunciar o demandar con el solo fin de favorecer a quien demanda y no a quien efectivamente ha sufrido el daño. No existe inconveniente en que estos terceros puedan demandar la responsabilidad por discriminación arbitraria, pero no que puedan demandar indemnización. La indemnización, como ya se dijo busca resarcir a la víctima, no a terceros, por mucha buena fe que puedan tener en su actuar.

ART 5 TER Norma de Quorum 4/7

Artículo 5° ter.- Incompatibilidad con otras acciones. (Aprobar)

NORMA: “El ejercicio de la acción de no discriminación arbitraria será incompatible con el ejercicio de la acción constitucional de protección y con la acción de tutela laboral en los términos de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, siempre que la acción de discriminación esté íntegramente contenida en ellas, refiriéndose a los mismos hechos y se interponga en contra de los mismos demandados. En tal caso, si hubiese sido practicada la notificación de la acción de protección o de la acción de tutela laboral, el tribunal deberá declarar la inadmisibilidad de la acción de no discriminación arbitraria.”

ART 10 INCISO TERCERO: Indicios Probatorios (RECHAZAR)

NORMA: “Cuando de los antecedentes aportados por el recurrente resulten indicios suficientes de que se ha producido una acción u omisión que importe discriminación arbitraria, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.”.

El inciso tercero nuevamente aplica conceptos que no son propios del Derecho Civil, sino que corresponden al Derecho Laboral, el cual funciona con otra lógica. Efectivamente, existe una norma similar en el Código del Trabajo, para las causas de Tutela. Pero en tales casos, la ley supone que las partes nos tienen igual poder de generar prueba, lo que es coincidente con la inequivalencia de las relaciones entre empleador y trabajador. En una tutela, se presume la existencia de una relación laboral, por lo que se parte de una premisa de poder de una de las partes.

No se ha justificado la aplicación de este principio excepcional en un procedimiento Civil, la norma presume la inequivalencia entre las partes y otorga una carga extraordinaria al demandado; esto es porque el tribunal no solo habrá determinado de antemano que existe el hecho, sino que reviste las características de discriminación arbitraria.

El texto aprobado en el inciso tercero del artículo 10 no es adecuado por cuanto permite al tribunal fallar sin conocimiento de pruebas y sin exigirle certeza, quedando la decisión al mero

arbitrio y discrecionalidad del tribunal, como también a la actividad del demandado (en orden a si entrega o no «fundamentos») lo que conculca la igualdad ante la ley, la certeza jurídica y las garantías probatorias inherentes al debido proceso. Además, al tribunal no le corresponde pronunciarse en la etapa de admisibilidad sobre el valor de los antecedentes recibidos, sino que ello se reserva a la etapa de sentencia, en donde el tribunal sí debe pronunciarse sobre el valor probatorio de lo ventilado en el juicio. Pretender un pronunciamiento en forma previa a la sentencia implica en que el tribunal pueda adelantar su decisión, conculcaría los principios de la imparcialidad, contradicción y bilateralidad de la audiencia

ART 12 inciso segundo (APROBAR)

NORMA: “En caso de constar en autos una acción indemnizatoria no desistida por el demandante, ni rechazada con antelación por incompatibilidad, ni terminada de alguna otra forma con antelación, el tribunal deberá pronunciarse expresamente sobre si la acoge o rechaza y, en el primer caso, determinar una cantidad líquida de dinero a que es condenado el demandado por este concepto.”.

ART 12 INC TERCERO (RECHAZAR)

NORMA: “y, adicionalmente, podrá ordenar el pago de una indemnización de perjuicios que fijará el juez de la causa, conforme al mérito de sus antecedentes, **la que no podrá ser inferior a cuarenta unidades tributarias mensuales.**”.

JUSTIFICACIÓN: Nuevamente se ocupan criterios laborales para un conflicto de materia Civil. En la tutela laboral, un procedimiento extraordinario de escasa ocurrencia que presupone condiciones excepcionales, se estipula una indemnización mínima de 6 meses de remuneración. Sin embargo, en materia civil, donde las partes se entienden con igual poder de generar prueba, no se justifica poner un piso al monto de una eventual indemnización.

Asimismo, se debe recordar que la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es que el daño debe probarse, y los casos en que se presumen son excepcionalísimos (por ejemplo, artículo 1559 del Código Civil que presume indemnización moratoria). Por lo anterior, resulta apropiado eliminar el establecimiento de un monto mínimo de indemnización.

ART 12 INC QUINTO(RECHAZAR) Norma de Quorum 4/7

NORMA: “Adicionalmente, si los hechos o expresiones discriminatorias que dieron lugar a la acción fueron expuestos a terceros por algún medio de comunicación o por redes sociales, el tribunal, en la misma sentencia, podrá ordenar al ofensor a difundir, a su costa, una declaración, aclaración o rectificación, a través del mismo medio de comunicación, en el mismo canal, página, dominio o dirección web, según corresponda, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 19.733. **La declaración, aclaración o rectificación será confeccionada por el denunciante, quien deberá presentarla ante el juez, dentro del plazo de veinte días contados desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.** En caso que el medio de comunicación, canal, página, dominio o dirección web ya no exista, por haberse eliminado o por otros motivos, el juez ordenará, al proveer dicha presentación, que la declaración, aclaración o rectificación se difunda por algún

medio idóneo de control o propiedad del ofensor, según lo solicitado por el denunciante. A falta de esta presentación, el tribunal ordenará al ofensor publicar íntegramente el texto de la sentencia”

JUSTIFICACIÓN: Las normas sancionatorias anexas son completamente desproporcionadas y no contribuyen a la reparación. En este caso, se obliga a la parte demandada y condenada a pagar una declaración pública, la cual es redactada por el propio denunciante, lo que no tiene simil en la legislación civil; en los juicios ejecutivos, la parte ejecutante debe proponer bases de remate, pero ellas tienen un marco definido y son solo una proposición. En este caso, la redacción no habla de proposición, sino que se refiere a confección, por lo que no requiere aprobación judicial. La justicia en ningún caso puede ser usada para revancha y en este caso, se puede prestar un evidente mal uso

ART 12 INC FINAL (APROBAR)

NORMA: “Asimismo, en caso de que el tribunal estimare que los actos u omisiones declarados como discriminatorios pueden ser además constitutivos de delito, deberá enviar de inmediato copia de la sentencia y demás antecedentes al Ministerio Público”

ART 13 (APROBAR) Norma de quorum 4/7

NORMA: “Recurso de apelación. La sentencia definitiva, la resolución que declare la inadmisibilidad de la demanda y las que pongan término al procedimiento o hagan imposible su prosecución serán apelables, dentro de quinto día, salvo la sentencia definitiva, la que será apelable dentro de décimo día.”

ART 12 N° 21 CÓDIGO PENAL (Aprobar)

NORMA: “Cometer el delito o participar en él de un modo que expresare rechazo o desvalorización basado en racismo, pertenencia étnica, identidad cultural, nacionalidad, situación migratoria o condición de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, participación o afiliación o no a organizaciones gremiales o sindicales, sexo, orientación sexual o afectiva, género, identidad o expresión de género, características sexuales, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estado de salud físico o mental, discapacidad y/o seropositividad y el trabajo, profesión u oficio”

ART 2° CÓDIGO DEL TRABAJO APROBAR

NORMA: “Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias basadas en motivos tales como el racismo, la pertenencia étnica, la identidad cultural, la nacionalidad,

la situación migratoria o condición de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la participación o afiliación o no a organizaciones gremiales o sindicales, el sexo, la orientación sexual o afectiva, el género, la identidad o expresión de género, las características sexuales, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud físico o mental, la discapacidad, la seropositividad, **el trabajo, profesión u oficio**, o cualquier otra condición física y/o social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.”.

ARTICULO TRANSITORIO (APROBAR)

NORMA: “Las disposiciones contenidas en el Título II de la ley N° 20.609 introducidas por la presente ley, solo serán aplicables a los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia.

Sin embargo, a los procedimientos que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de esta ley y que aún se estuvieren ventilando en primera instancia, les serán aplicables los artículos 12 bis y 13 de la ley N° 20.609 introducidos por la presente ley”.

MINUTA ASPECTOS POSITIVOS Y PROBLEMATICOS PROTOCOLO SAN SALVADOR

Indice

Aspectos positivos: P1

Aspectos problemáticos: P2

- Breve análisis P3

Aspectos ya incorporados: P4

ASPECTOS POSITIVOS:

Artículo 8 Derechos sindicales

1. Los Estados Partes garantizarán:

3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato (**LIBERTAD SINDICAL**)

Artículo 13 Derecho a la educación

4. Conforme con la legislación interna de los Estados Partes, **los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos**, siempre que ella se adecúe a los principios enunciados precedentemente. (**Libertad de educación**)

5. **Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza**, de acuerdo con la legislación interna de los Estados Partes (**Libertad de enseñanza**)

Artículo 15 Derecho a la constitución y protección de la familia

1. **La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado** quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material. (**Protección y preeminencia de la familia**)

3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a:

a. **Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto; (Reconocimiento y protección de la vida del que está por nacer)**

c. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; (**no habla de AUTONOMIA PROGRESIVA**)

d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad. (**no habla de AUTONOMIA PROGRESIVA**)

Artículo 16 Derecho de la niñez

Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. (Derecho preferencial de los padres a educar a sus hijos)

ASPECTOS PROBLEMATICOS

NORMAS

Artículo 19 Medios de protección

5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados **acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo** y las recomendaciones de carácter general que al respecto se estimen pertinentes.

6. En el caso de que los derechos establecidos **en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13** fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado Parte del presente Protocolo, **tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.**

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, **la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo** en todos o en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado.

Artículo 8 Derechos sindicales

1. Los Estados Partes garantizarán:

a. El derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados Partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados Partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;

Artículo 10 Derecho a la salud

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida **como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.**

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;

Artículo 13 Derecho a la educación

c. **La enseñanza superior debe** hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, **por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;**

ANÁLISIS BREVE

Hay 2 grandes temas con el Protocolo:

La progresividad: La progresividad es esencial para la implementación del Protocolo y debieran ser los Estados lo que determinen los estadios de desarrollo de cada uno de los Derechos establecidos en el Protocolo; sin embargo, del propio Protocolo se desprende que en algunos casos ello quedaría supeditado a órganos supra estatales.

La progresividad también tiene la arista de la vigencia. El protocolo es del año 1998, estamos en el año 2021...que criterio se ocupa para definir esa progresividad. Cual es el punto de partida? En qué momento se hace exigible algún Derecho?

¿Estamos frente a un listado de buena fe? ¿O estamos frente a un documento del cual emanan derechos y obligaciones internacionales?

El Protocolo, aunque un avance, presenta incertidumbres relevantes respecto de su implementación y plazos para que ello ocurra.

Medios de Protección: En los casos del artículo 8° 1.A. y del artículo 13 la determinación de progresividad queda entregada a la Comisión Interamericana de DDHH, y en último caso a la Corte Interamericana de DDHH.

El incumplimiento puede ser denunciado por PARTICULARES a la Comisión; lo que implica que será un ente externo al Estado quien determine si un Estado en particular está en condiciones de cumplir o no un derecho o un aspecto parcial de ese Derecho.

Por lo tanto, el que y el cuando ya no dependería del Estado ni de las opciones o decisiones estratégicas de un gobierno, sino que quedaría en manos de un tercero que se maneja por otros criterios, válidos, pero distintos a los definidos por cada país.

ANUNCIOS DEL GOBIERNO:

El gobierno ha anunciado una declaración interpretativa y una reserva:

Una declaración para aclarar que derechos son litigiosos (Sin especificar cuales)

una reserva respecto de los organismos multilaterales y su ámbito de participación (Que tampoco ha especificado.)

ASPECTOS YA REGULADOS EN EL DERECHO INTERNO (NO PROBLEMATICOS)

Artículo 6 Derecho al trabajo

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.

Artículo 7 Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo

Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:

a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;

b. El derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;

c. El derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;

d. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional;

e. La seguridad e higiene en el trabajo;

f. La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;

g. La limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;

h. El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales.

Artículo 8 Derechos sindicales

1. Los Estados Partes garantizarán:

b. El derecho a la huelga.

2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean propias a una sociedad democrática, necesarias para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley.

Artículo 9 Derecho a la seguridad social

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.

Artículo 11 Derecho a un medio ambiente sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Artículo 13 Derecho a la educación

1. Toda persona tiene derecho a la educación.

3. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:

a. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

Artículo 14 Derecho a los beneficios de la cultura

Artículo 17 Protección de los ancianos

Artículo 18 Protección de los minusválidos

MINUTA INTERVENCION MODIFICACION LEY ZAMUDIO

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

SEÑORA PRESIDENTA:

Me tocó se parte de la Comisión de DDHH mientras se discutió largamente este proyecto con dos informes. En la primera discusión, un proyecto de artículo único se transformó en una modificación integral del proyecto, ya no solo en el procedimiento, sino que también el fondo, lo que llevó a que se aprobara en su oportunidad solo en general y se abriera otro espacio de indicaciones. En resumen, este proyecto tuvo dos discusiones en particular, donde en la segunda se profundizó en los errores de la primera.

Cuando los senadores mocionantes decían que la ley tenía poca aplicación por las cortapisas procesales, tenían un punto atendible; sin embargo, la ampliación de las categorías sospechosas, la imposición de indemnizaciones mínimas, la legitimación activa a terceros para demandar no solo la discriminación, sino que también la indemnización, la reducción de la posibilidad de justificación razonable a parámetros simplemente imposibles de cumplir o que incluso se haya eliminado la multa establecida para el demandante temerario dan cuenta de una visión que busca alentar la judicialización y no prevenir la discriminación.

Lamentablemente, en este como en otros temas valóricos, no fuimos apoyados ni acompañados por nuestro gobierno. Efectivamente, la subsecretaria Lorena Recabarren estuvo presente en todas las sesiones y a nombre del gobierno, apoyó varias de las indicaciones más controversiales.

Aún quedan pendientes varias votaciones separadas, pero aunque pueden moderar aristas del proyecto no van subsanar una visión ya establecida en el mundo al cual represento y del cual me siento parte. Este proyecto busca silenciar a las iglesias evangélicas. Cada una de las modificaciones al fondo del proyecto busca acallar el mensaje que los pastores consideran relevante en materias morales.

La multa mínima de 40 UTM, la facultad que se otorga a terceros para cautelar un supuesto “interés difuso”, o que la víctima pueda escoger si demanda en el domicilio del demandado o del demandante, o que se invierta la carga de la prueba con meros indicios, hasta el hecho que en caso de ordenarse una declaración pública, ésta deba ser redactada por el denunciante o que se haya eliminado la multa para el denunciante temerario aunque se declare que la denuncia carecía completamente de fundamento y que con ello se haya mancillado el honor del demandado sometiéndolo al escarnio público...dan cuenta de un patrón.

Los principales afectados por esta ley son pequeñas iglesias evangélicas, sin espaldas financieras para resistir denuncia tras denuncia en diversas comunas y regiones, para las cuales, incluso el monto mínimo legal fijado como indemnización significa una carga económica pesada.

Se dirá que lo que se busca es actualizar la legislación, se nombrarán tratados, se dirá que es simplemente ponerse al día, se dirán muchas cosas; pero en los hechos; este proyecto, en su actual redacción, es una ley mordaza para las iglesias evangélicas y una amenaza a la libertad de expresión.

Por eso voy a rechazar los cambios, salvo las indicaciones del senador Pugh y los cambios formales en la tramitación del procedimiento.

He dicho, muchas gracias señora Presidenta.

MINUTA INTERVENCION PROYECTO QUE REGULA EL DELITO DE INCENDIO

Tercer tramite

SEÑORA PRESIDENTA:

Hace un tiempo respondí una critica de diputadas sobre la lentitud del Senado, expresando que en muchas ocasiones teníamos que arreglar los entuertos que enviaba la cámara.

Hoy, debo reconocer que la Cámara de Diputados y su comisión de Seguridad han realizado un gran trabajo en la revisión de este Proyecto, conocido como Ley Juan Barrios; las modificaciones realizadas le otorgan coherencia y mejoran el tipo penal que se busca sancionar. Hay que dejar en claro que este proyecto no crea ningún delito, solo actualiza los elementos del tipo, distinguiendo siempre entre incendios con resultado de muerte, con personas en el interior y el tipo residual.

Debo destacar que incluso estoy de acuerdo con ciertos aspectos que fueron rechazados en la comisión de seguridad en este tercer tramite y por los cuales se va a pedir votación separada.

En particular quiero referirme al rechazo al aumento de penas para quienes incendian vehículos o instalaciones policiales. Me parece urgente aumentar las penas a los violentistas que atacan a Carabineros y la PDI, especialmente cuando son agredidos mientras están en su vehículos o instalaciones cumpliendo con su deber. Lanzar un artefacto incendiario debe ser objeto del mayor reproche jurídico y repudio ciudadano. No podemos tener contemplaciones con aquellos que no solo atacan a personas que buscan cumplir con su deber, sino que buscan socavar al Estado de Derecho y en algunos casos, la democracia, mediante el recurso de quemar a nuestros policías.

Por lo mismo, pido votar favorablemente el informe, salvo las votaciones separadas del Numeral 1) del artículo único; la Letra c) del numeral 2) del artículo único y el Inciso segundo del artículo del numeral 3) del artículo único.

MINUTA INTERVENCION PROYECTO PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

SEÑORA PRESIDENTA:

Este Protocolo que hoy votamos ha demorado tanto tiempo en tramitarse, que en algunos aspectos ha sido superado por la realidad nacional y en otros, sin embargo, nos pone en la disyuntiva de enfrentarnos a acciones en el extranjero y entregar facultades soberanas a organismos internacionales.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales o Protocolo de San Salvador es del año 1999 y actualmente se encuentra ratificado por más de 20 países del continente. Por razones políticas, las potencias aplauden estas Convenciones y Protocolos pero casi nunca los firman; esta no es la excepción.

Según lo informado por el gobierno, en muchos casos, los objetivos buscados por el protocolo ya han sido alcanzados por la legislación interna o, incluso, superados. El protocolo, parece sugerir que es más una guía de objetivos a lograr sin establecer plazos, incorporando progresividad; por lo que no debiera implicar mayores problemas

Sin embargo, como casi siempre, no todo lo que brilla es oro. El protocolo busca efectivamente no solo la promoción de derechos económicos, sociales y culturales, sino que obliga a los estados y al momento de ratificarlo, nuestro país debe responder de su cumplimiento.

Nos hemos enfrentado antes a este tipo de documentos: Inocuos en apariencia, pero mortíferos en su contenido; verdaderos caballos de Troya de los sectores progresistas que disfrazados de palabras rimbombantes, solo sirven para incorporar su agenda valórica por la ventana

Y ahí comienzan los problemas; los medios de protección que establece el propio protocolo implican la posibilidad que nacionales puedan reclamar ante organismo internacionales la responsabilidad del Estado de Chile. Se le consultó a la Cancillería si los

ministerios sectoriales habían hecho el calculo que el cumplimiento exacto del Protocolo podría implicar; no hubo respuesta exacta, pero sí inmediata preocupación.

No es menor la posibilidad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda proponer nuevos derechos y libertades, según dispone el artículo 22; por supuesto que conocemos el riesgo y nos preocupa.

Finalmente, el gobierno se comprometió a presentar una declaración interpretativa para aclarar que derechos son litigiosos y una reserva respecto de los organismos multilaterales y su ámbito de participación; bajo ese compromiso, decidí apoyar en la comisión este protocolo. Lamentablemente no especificó cuales derechos ni en que sentido haría la reserva.

Por lo mismo entendemos las dudas y preocupación que genera entre ciertos sectores la aprobación de este Protocolo.

Esto fue el 2019 y mucha agua ha corrido bajo el puente de la confianza con el gobierno. Por lo mismo, tengo más dudas que certezas

Por todo lo anterior, voy a abstenerme.

He dicho señora Presidenta.

MINUTA INTERVENCION PROYETO QUE ESPACIOS DE HABITABILIDAD PARA EMBARCACIONES MENORES QUE PRESTAN SERVICIOS A LA ACUICULTURA

Discusión en general

Señora Presidenta:

Hay temas muy complejos de explicar y en consecuencia, de analizar. La regulación de las condiciones de habitabilidad de las embarcaciones pesqueras menores y sobre todo, las de las naves que prestan servicios a la acuicultura pertenecen a esta categoría.

Cuando se habla de embarcaciones de pesca, las normas en su inmensa mayoría se refieren a naves pesqueras menores que, por su tamaño y condiciones de trabajo no requiere de espacios grandes para esos fines porque los tiempos a pasar en esos espacios son reducidos.

No ocurre lo mismo con las embarcaciones que prestan servicios a la acuicultura; estas naves suelen pasar largas jornadas que llegan a semanas, por lo que las condiciones habituales son incómodas y hasta invivibles. Una de las causas de la alta rotación de trabajadores en esa industria es la dificultad para soportar las condiciones que impone la falta de espacios suficientes.

A ello se suma la confusión en el uso de TGR y Arqueo bruto en nuestra legislación a pesar del Convenio Internacional de Arqueo de 1969, vigente desde 1983. Todo ello indica que este proyecto es más que necesario; que en síntesis, le entrega a un Reglamento la facultad de regular la habitabilidad de estas embarcaciones; lo que constituye una solución lógica, en una primera revisión, dada la dificultad técnica del desafío.

Como es conocido, la inmensa mayoría de las actividades acuícolas se desarrollan en la Región de Los Lagos y este tema ha sido preocupación de los trabajadores que lo sufren, sino que también de los armadores.

Por ello, apruebo en general porque este proyecto soluciona de manera satisfactoria el problema y abre la puerta para una solución más definitiva.

He dicho.

Muchas gracias, señora Presidenta.

MINUTA INTERVENCION PROYECTO MATRIMONIO IGUALITARIO

DISCUSION GENERAL Y PARTICULAR

SEÑORA PRESIDENTA:

Como persona, como cristiano y como político creo en el amor y en el compromiso de pareja; ojalá para toda la vida, aunque no siempre sea así. Estuve a favor de la Ley de Divorcio porque consideré necesario dar ese paso, lo mismo con la ley de filiación, así que he dado muestras de estar abierto a los cambios; pero no cualquier cambio y no a cualquier costo. Por lo mismo tengo 3 razones para estar en contra de este proyecto de matrimonio igualitario: Motivos morales, históricos y políticos.

La Biblia nos enseña que **"El amor no hace daño a nadie. De modo que el amor es el cumplimiento de la ley". (Romanos 13:10)**". Los cristianos creemos de verdad en el amor y la tolerancia...el cristianismo aún es perseguido en Africa, Asia y Medio Oriente; sabemos lo que es la persecución y la discriminación, por eso no demonizo a quienes apoyan este proyecto, pero demandando el mismo respeto para quienes estamos en contra. Somos muchos los que creemos que el matrimonio es la base de la familia y es en la familia en que se forma a nuestros hijos. Somos muchos los que creemos en la familia tradicional; respeto a quienes creen en formas diferentes de familia; pero para nosotros todo parte en el matrimonio que es y debe ser entre un hombre y una mujer.

La misma Biblia nos enseña: **"Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa, y cada mujer su propio esposo". (1 Cor 7:2)**". El mundo cristiano tiene una postura clara y definida desde siempre; al menos desde hace casi dos mil años.

Lo repito una y otra vez, **El matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer**; así también lo ha sido históricamente. No es discriminación establecer que solo pueda ser entre un hombre y una mujer por la propia naturaleza y los fines del matrimonio. La Corte Europea de DDHH así lo ha señalado; que no es precisamente un tribunal conservador. Las propias organizaciones pro derechos homosexuales expresaron, al momento de

tramitarse el Acuerdo de Unión Civil, que no les interesaba el matrimonio por ser un vínculo decadente.

No obstante todo lo anterior, hoy el tema fue reflatado...no por los grupos de derechos homosexuales, no por la oposición, ni por los partidos oficialistas, sino que por el propio Presidente de la República, rompiendo la palabra empeñada a las iglesias cristianas durante su segunda campaña presidencial de no impulsar un proyecto de este tipo.

El presidente tiene la prerrogativa de impulsar esta idea, es su facultad constitucional; pero constituye un agravio gratuito a quienes confiaron en su palabra y a los partidos que lo apoyan al no ser consultados, ni menos aun llamados a conversar. El gobierno divide a los que debiera unir, buscando el aplauso de quienes nunca le van a reconocer merito alguno.

Este proyecto va a ser aprobado, están los votos. Veremos lo que ocurre con las votaciones separadas. Pero aun en estas circunstancias, me la juego por defender lo que creo, en el espacio que corresponde...este Congreso Nacional; y por lo mismo, voy a rechazar este proyecto, con la convicción que constituye un error.

He dicho Señora presidenta.

MINUTA INTERVENCION REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

SEÑORA PRESIDENTA:

El ser humano es 70% agua, La superficie del planeta está cubierta en dos terceras partes por agua y sin embargo el agua dulce es un bien escaso...y cada vez más escaso.

Debemos asumir que en materias hídricas, el futuro se ve complejo y no solo para la zona norte y centro del país. En Osorno, por primera vez en toda nuestra historia se está planificando la construcción de embalses para acumular las aguas de las lluvias invernales. La isla de Chiloé es otro caso paradigmático; sin cordillera que acumule nieve, depende de los ciclos de lluvia y el agua que acumulen las turberas. Hoy escasean ambas

Según los expertos, las crecientes sequías llegaron para quedarse. El agua se convierte entonces en un bien más que escaso, en un bienpreciado. Pero el agua no es un material aislante, no es un mineral precioso para usar de adorno...el agua es vida.

Teniendo una legislación hecha para una realidad diferente, se hace una obligación discutir como adaptamos nuestras normas a este nuevo escenario. Obviamente, tenemos profundas diferencias en algunos aspectos respecto del texto que hoy se discute. Me tocó participar en algunas sesiones en que se revisó este proyecto y es difícil calcular las implicancias y derivadas que tiene la regulación del agua; baste decir que en la actualidad, hay más de 50 organismos públicos que tienen relación con la regulación del agua.

Como administrar un bien escaso y tan elemental para la vida es fundamental para preparar el futuro. El futuro en términos de consumo humano, agricultura familiar e intensiva, minería o industrias con uso intensivo del recurso. ¿Cómo conciliar el uso histórico con las nuevas necesidades? ¿Cómo regulamos sin acabar con nuestra agricultura de exportación o la agricultura familiar? ¿Qué vamos a hacer con esos derechos de aprovechamiento debidamente registrados pero que hoy no tienen caudal? ¿Cómo armonizamos el uso productivo con la ecología? Como conversan las necesidades de nuestro norte árido con nuestro Sur verde? ¿Cómo evitamos que la ecología profunda se convierta en un profundo error?

Hoy, el agua se ha convertido en un tema de moda... ¡enhorabuena!

Pero la discusión debe darse en el marco del respeto a los principios básicos del Derecho: respeto a los derechos ya constituidos, al uso histórico del agua en la agricultura campesina, privilegiando el consumo humano y no pensando en complacer consignas que no por atractivas dejan de ser peligrosas.

Voy a aprobar la idea de legislar con la esperanza de despejar un nudo relevante, de derribar mitos y colaborar con un futuro sustentable y amigable con el desarrollo económico.

He dicho, señora Presidenta.